

LAS CLAVES

► **Permisos parentales.** El martes se convalida el decreto de los permisos parentales que el PSOE tampoco ve asegurado.

► **Adelanto electoral.** Algunos socios ponen en duda que Sánchez no esté pensando en ir a las urnas si ve ocasión.

► **Iniciativas inciertas.** La quita de la deuda, la abolición de la prostitución o el pacto climático están muy en el aire.

quedó demostrado antes del verano, cuando, pese al impacto generado por la imputación por corrupción del número tres del PSOE, ni un socio presionó para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza ni planteó una moción de censura.

Capacidad de transformación

Lo cierto es que, entre los aliados de investidura, hay dudas de que realmente el Gobierno vaya a continuar sí o sí. Algunos incluso las expresan en público. El líder del PNV, Aitor Esteban, no descartó esta semana que, si ve que por la gestión de los incendios o algún otro asunto «la demoscopia le acompaña», Sánchez opte por disolver las Cámaras. Y Podemos también se ha mostrado alerta. En el propio seno del Gobierno hay quien admite que la mera presentación de los Presupuestos sirve para exponer ante el electorado una suerte de programa, aunque el discurso oficial siga siendo, como arguyó Sánchez el lunes, que ir a elecciones sería «irresponsable» y que su obligación es seguir «transformando» el país.

Es esa capacidad de transformación, en todo caso, la que está en cuestión. En lo que va de curso político, Sánchez ha propuesto un 'pacto de Estado' para hacer frente a la emergencia climática que incluso Sumar ve con recelo; el Consejo de Ministros ha dado un primer paso para aprobar una quita de la deuda a las comunidades autónomas que cumple con las exigencias de ERC pero tampoco tiene hoy por hoy votos para superar una tramitación parlamentaria, y la dirección del PSOE se ha marcado entre sus prioridades la aprobación de una norma para abolir la prostitución que genera resquemores a izquierda y derecha.

El ala socialista del Gobierno se afana en relativizar su precariedad parlamentaria y, en un análisis más cuantitativo que cualitativo, insiste en que en lo que va de legislatura ya ha aprobado 42 leyes y ha cumplido el 45% de sus compromisos. La vicepresidenta segunda ha optado por otra estrategia. Su empeño es pedir a los ciudadanos progresistas que tengan en cuenta que ella ha hecho su trabajo y que el problema está en lo que hay enfrente. «Unos estamos aquí para hacer el bien y otros para hacer el mal», adujo esta semana.



Junts reunió a su ejecutiva en Waterloo el día después de la entrevista entre Puigdemont e Illa. R. C.

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

El líder de Junts trasladó al presidente Illa en Bruselas que el estado de las relaciones con los socialistas es todo menos buena

CRISTIAN REINO



BARCELONA. La ejecutiva de Junts, reunida en Waterloo, apretó el miércoles el botón que pone en marcha la cuenta atrás a la legislatura española: en este trimestre, en otoño, el partido independentista catalán decidirá si sigue apoyando al Gobierno. Este es el anuncio que salió del cónclave postconvergente, el día después de que el presidente de la Generalitat y el líder de Junts se vieran cara a cara por primera vez.

Puigdemont trasladó a Illa que el estado de las relaciones con los socialistas es crítica en lo que se refiere al balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos para la investidura de Pedro Sánchez. Es lo mismo que escuchó Zapatero en Suiza unos días antes. Y lo mismo que repite Junts casi desde el inicio de la legislatura. Hasta ahora no ha roto. Vota en ocasiones junto al PP y Vox y se desmarca de la mayoría de la investidura. Eso sí, sigue negociando y mantiene viva la mesa de Suiza. En verano, Puigdemont afirmó que en otoño pasarán cosas inéditas. Se refería a la decisión que debe adoptar su partido respecto a Sánchez. Los Presupuestos, en el horizon-

te. Junts lleva meses apretando del cuello al Gobierno, aunque sin llegar a la asfixia. Hace casi un año, lanzó el órdago de la petición de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. La retiró en febrero y activó una «prórroga que se está alargando sine die, sin que los junteros se decidan a ir a los penaltis.

De esta forma, han conseguido que el Ejecutivo avance más de lo que ellos mismos esperaban sobre la reclamación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE o haya cedido con la delegación a la Generalitat de las competencias sobre inmigración. El Gobierno también se ha implicado más de lo que se suponía con la amnistía y el enfrentamiento con el poder judicial.

El problema para Junts es que estas tres carpetas están incompletas. Ni el catalán es oficial en la UE (aunque ya se habla en el Congreso), ni el Parlamento español ha avalado el acuerdo entre socialistas y junteros para traspasar al Govern las competencias migratorias (Podemos se niega) ni Puigdemont ha podido aún regresar a casa.

La estrategia negociadora para los junteros en este trimestre será la misma que hasta ahora: amenazar con romper, para obtener concesiones. El primer revolcón de la temporada se lo dará con la ley para la reducción de la jornada laboral. La diferencia es que Sánchez, que se guarda como última carta en la manga una reunión con el líder nacionalista, ya ha advertido de que puede seguir adelante sin Presupuestos, por lo que el margen negociador se

reduce para los independentistas. Por si fuera poco, la credibilidad se le está agotando a Junts, que ha amagado ya varias veces en la legislatura con partir peras pero siempre ha dado marcha atrás en el último momento.

Puigdemont gobierna el partido con mano de hierro. Esta semana, no ha sido buena para sus intereses. Se ha llevado un revés de parte del abogado general de la UE, que ha asegurado, a la espera de la sentencia final del TJUE, que el Parlamento Europeo actuó de forma correcta cuando le retiró la inmunidad parlamentaria. Y además, Jaume Giró ha cesado como diputado y ha renunciado a su puesto en la dirección de Junts por discrepancias con la «orientación» que Puigdemont está dando al partido.

La salida de Giró, que era el referente del sector más pragmático de la formación, da pistas de cómo respira Junts y de que el sentimiento mayoritario en la formación es contrario a las te-

Hace casi un año que Junts avisa al Gobierno de que está en situación de «prórroga», pero no consuma la amenaza

Oficialidad del catalán, delegación de competencias de inmigración y amnistía son los principales escollos

sis pactistas que defendía el exconsejero de Economía, que abogaba por una vuelta a la vieja Convergencia, a la que en cierta forma se acercó Puigdemont cuando pactó con Sánchez.

Junts tiene que tomar una decisión respecto a su apoyo al Gobierno, presionado electoralmente por el PSC y por Aliança Catalana. Los socialistas están dispuestos a lanzar una OPA para 'pescar' en el caladero nacionalista moderado, el que hasta ahora se identificaba en Junts con Jaume Giró. Algunos, de hecho, han querido ver la visita de Illa a Puigdemont en Bruselas como una especie de abrazo del oso del president para acabar de ocupar toda la centralidad del arco político catalán.

Presión de Aliança

Del otro lado, Junts siente la presión de Aliança Catalana, que le aprieta desde el flanco de la extrema derecha y del independentismo más radical. La ANC, que no está lejos en algunas de las posiciones de Aliança Catalana en lo identitario, pedirá el jueves en la Diada a Junts y a ERC que rompan con Sánchez. La manifestación independentista se celebrará dos días después de que el Constitucional comience a debatir sobre el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra la decisión del Supremo de denegarle la amnistía y sobre su petición de que se le levante la orden de detención. Es su primera opción de regreso. La otra, para final de año: está prevista la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para saber si la ley de amnistía se adecuaba al derecho europeo.